

Votar en El Salvador: Psicología social del desorden político*

Ignacio Martín-Baró

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
San Salvador, El Salvador

Resumen

El análisis psicosocial del comportamiento político exige una previa clarificación sobre la perspectiva y los intereses desde los que se realiza, ya que el punto de partida condiciona intrínsecamente el punto de llegada. La psicología social actual está demasiado condicionada por la perspectiva desde el poder y los intereses que sostienen a los centros académicos dominantes, lo que dificulta, cuando no distorsiona y aun impide la comprensión de los comportamientos de quienes se encuentran marginados u opuestos a los poderes establecidos. Un examen del último proceso electoral en El Salvador pretende mostrar las diferentes conclusiones a que se llega cuando se parte del supuesto y de la perspectiva del orden social, o cuando el mismo comportamiento se mira sobre el trasfondo de un verdadero desorden político. Votar resulta ser, entonces, un acto con motivaciones múltiples y sentidos contradictorios, que involucra en última instancia, no una participación en el poder, sino una desmovilización política.

*Ponencia presentada en el III Encuentro Nacional de Psicología Social de España, celebrado en Las Palmas, del 14 al 17 de septiembre de 1983, sobre el tema "Psicología social y política". Publicado originalmente en el *Boletín de la AVEPSO*, vol. X, núm. 2, El Salvador, agosto de 1987, págs. 28-34.

1. El punto de partida para una psicología social de la política debe ser desentrañar la política de la psicología social

Si el objeto de la psicología social consiste en estudiar lo que de ideológico hay en la acción humana, es decir, examinar qué fuerzas e intereses sociales determinan en cada caso el comportamiento de las personas y de los grupos (Martín-Baró, 1983), resulta fundamental comenzar esa tarea con el quehacer de los psicólogos sociales en cuanto tales, a fin de clarificar lo que de ideológico hay en la misma psicología social (ver Braunstein, 1979). Este autoanálisis es particularmente necesario como requisito para una psicología social de la acción política, ya que si la perspectiva adoptada es crucial para determinar en cada caso lo que se puede ver y cómo se puede ver, con mayor razón cabe esperar que se produzcan importantes sesgos en el estudio de los comportamientos políticos, terreno privilegiado de los intereses sociales y de las racionalizaciones ideológicas.

Debemos preguntarnos entonces, desde dónde pretendemos analizar el quehacer político, y ello supone tanto revisar a partir de qué supuestos y preguntas iniciamos nuestro examen, como también con qué unidades de análisis, conceptuales y metodológicas, lo realizamos. El cuestionamiento debe dirigirse a los esquemas de trabajo más que a los intereses personales, a la intencionalidad objetiva del proceso más que a las intenciones subjetivas del psicólogo. No se trata de negar el influjo que sobre el objeto de análisis pueda tener el propio individuo, sino de cuestionar la presunta asepsia de su bagaje conceptual y metodológica; la buena voluntad subjetiva no cambia la naturaleza ni el alcance de los conceptos ni, por tanto, la acción subsecuente que posibilitan y aun reclaman.

La cuestión no se zanjaría imponiendo una teoría única al análisis psicosocial, ya que al interior de grandes marcos teóricos pueden darse importantes diferencias conceptuales; se trata más bien de subrayar el papel determinante que como principio epistemológico desempeña el "desde quién" de nuestro análisis y nuestra actuación. Un buen ejemplo nos lo ofrece sin duda el psicoanálisis, asimilable, al parecer, tanto a la visión progresista de Wilhelm Reich (1933-1965), como a la perspectiva conservadora de Talcott Parsons (1964). Y es que, mientras Reich examinaba los procesos desde su compromiso con las luchas obreras y antifascistas, Parsons contemplaba el mundo desde el olímpo de su cátedra en Harvard.

En 1969, dos psicoanalistas franceses, bajo el pseudónimo de "André Stéphane", publicaban un estudio rabiosamente integrista, en el que interpretaban las revueltas estudiantiles de mayo de 1968 como el síntoma de un Edipo mal resuelto, como el esfuerzo por moldear un mundo sin padres bajo la inspiración narcisista de la religión cristiana. Desde el diván clínico de "Stéphane", la politización estudiantil no sería más que una fácil forma de proyectar los propios conflictos personales y eludir así su resolución. Frente a este modelo de psicoanálisis conservador, otro psicoanalista de habla francesa, Frantz Fanon, había escrito pocos años antes algunas de las obras más lúcidas sobre la lucha liberadora de un pueblo oprimido, Argelia, en las cuales se había involucrado personalmente (Fanon, 1952-1970; 1963; 1968). Para Fanon, la lucha revolucionaria del argelino no era el producto de una inmadurez edípica, sino el esfuerzo por encontrar su propia identidad histórica, arrancando violentamente del país y de su psiquismo la presencia opresiva del colonizador.

En la actualidad, los paradigmas dominantes en la psicología social provienen de los centros de poder aca-

démico, que reflejan con bastante fidelidad los intereses de quienes suministran dinero para las investigaciones y reclaman respuestas a sus inquietudes y problemas. No es entonces de extrañar que, en lo concerniente a la psicología social de la política, el estudio se haya centrado en lo que Davies ha calificado como el comportamiento legítimo de los cuerpos políticos "sanos", dejando de lado las áreas más conflictivas y los procesos anómalos (Davies, 1973). Más aún, no sólo se parte de las inquietudes y preguntas de quienes detentan el poder, sino que su perspectiva parece asumirse como connatural. De ahí, por ejemplo, que el referente principal, cuando no el único para el análisis de la violencia, sea el comportamiento contrario a los regímenes sociales establecidos (ver Lubek, 1979), o de que se reserve la calificación de "terroristas" a quienes operan fuera de los marcos legales, o no establecidos por quienes detentan el poder (ver Chomsky y Herman, 1979).

Una revisión de las principales publicaciones científicas en psicología social muestra que el paradigma predominante en la actualidad es el análisis de atribución (Reeves y otros, 1979; Smith y otros, 1980). El análisis de atribución surge de la concepción de "psicología ingenua" de Fritz Heider (1958), que considera el funcionamiento del hombre de la calle como materia y criterio de los procesos psicológicos normales. Ahora bien, ese "hombre de la calle", que nos recuerda mucho a las "mayorías silenciosas" de Richard Nixon, resulta ser producto de un determinado orden social; asumir su funcionamiento psíquico factual como referente último significa aceptar el reclamo ideológico del poder establecido, universalizar su particular visión humana, y así eximir, al análisis, de un cuestionamiento ulterior sobre la relación entre las formas y los contenidos, entre los procesos psíquicos y los intereses sociales. Las normas y regularidades existentes son un

producto histórico y, por tanto, su afirmación positiva supone ya la negación de otras posibles normas y regularidades alternativas.

La utilización predominante del modelo de atribución, heredero extrínseco e intrínseco del modelo de las actitudes, y en general de la hegemonía actual de la perspectiva cognoscitiva, conduce a una subjetivización y a un vaciamiento histórico de los procesos psicosociales, que parecen quedar explicados una vez que se determina cómo atribuyen formalmente las personas la causalidad de los actos percibidos o cómo funcionan sus esquemas perceptivos (ver Sampson, 1981). Aplicado este modelo a los comportamientos políticos, no se ve cómo se pueda superar un primer nivel fenomenológico, que para nada interroga y menos cuestiona las raíces del poder social.

En síntesis, si se pretende lograr una psicología social de la política que constituya un aporte significativo, debe comenzarse por desentrañar la posible ideologización de la misma psicología social, los intereses y fuerzas que sesgan el análisis, aunque no sea más que para tomar conciencia de las propias limitaciones, y no ofrecer como historia universal lo que no pasa de ser cotilleo provinciano.

2. Para entender el comportamiento político en un país como El Salvador, el referente estructural no puede ser un orden social, sino un desorden establecido

Por lo general, la perspectiva psicosocial asume la existencia de un orden social más o menos estable, más o menos coherente, más o menos equilibrado. Sin embargo, resulta difícil comprender desde una perspectiva de este tipo los comportamientos políticos más característicos de la situación actual en El Salvador. Por el



contrario, esos comportamientos empiezan a resultar inteligibles cuando se les remite, no a un orden social, sino a un verdadero desorden establecido —lo que supone una comprensión distinta sobre las instituciones sociales, sobre la confrontación de las fuerzas sociopolíticas, sobre la estructura normativa o sobre los procesos de socialización o de participación política.

En el marco de lo que llamo un desorden establecido, las relaciones entre la estructura social y la personalidad de los individuos son múltiples y diversas, sin que se pueda presuponer algún tipo de linealidad y mucho menos de unidireccionalidad causal. El mismo hecho de que El Salvador sea un país históricamente dependiente y, en la actualidad, intervenido por los norteamericanos, hace todavía más complejo el sentido de los actos políticos de grupos y personas. Sería esto

fácil de probar apuntando al comportamiento represivo de las fuerzas de seguridad, o al sentimiento de la población hacia los movimientos insurgentes. Pero tomemos un ejemplo cuya apariencia parecería contradecir nuestra tesis y sugerir que sí existe un orden político y social en El Salvador: la participación ciudadana en un proceso electoral. El análisis es tanto más significativo cuanto que cada vez que la población salvadoreña se ve abocada a unas nuevas elecciones, el mundo vuelve a contemplar extasiado, por sus televisores, quizás vía satélite, a un pueblo analfabeto, famélico y en guerra civil, participar con entusiasmo en el máximo ritual de la democracia al estilo norteamericano.

El 28 de marzo de 1982, a los dos años y medio del golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional del general Carlos Humberto Romero, se celebraron en

El Salvador elecciones a una Asamblea Constituyente, con las cuales se pretendía restablecer la legitimidad institucional de los poderes públicos. Las elecciones fueron adversas por los movimientos populares, democráticos y revolucionarios, que desde enero de 1981 se habían levantado en armas. A pesar de la oposición de los insurgentes, y de sus acciones bélicas el mismo día de las elecciones, 1,551,687 salvadoreños depositaron su voto, según los datos oficiales.

Para apreciar la magnitud relativa de este número, hay que recordar que la población total de El Salvador, en 1980, era de cinco millones, que entre 1980 y 1982 medio millón de salvadoreños tuvieron que huir del país, y que más del 50 por ciento de la población del país es menor de edad. En otras palabras, si sólo se toma en cuenta a los electores potenciales reales, habría votado un 85 por ciento del electorado salvadoreño (CUDI, 1982, págs. 584-585). Por supuesto, este cálculo es meramente hipotético, ya que la votación se hizo sin registro electoral. En todo caso, el espectáculo de larguísima colas de votantes ante los pocos centros de votación dispuestos en las diversas ciudades, especialmente en la capital, convencieron al mundo de que el pueblo salvadoreño se había volcado a las urnas para elegir a sus representantes. Se diría que los ojos —y luego los datos— contrariaban lo que parecía reclamar la razón, es decir, que era imposible semejante comportamiento electoral en un país en guerra civil. De hecho, las versiones oficiales corearon los resultados como un rechazo del pueblo salvadoreño a los insurgentes; observadores más críticos interpretaron la votación como una respuesta a lo que la propaganda oficial había repetido compulsivamente: "tu voto, la solución". En cualquier caso, la masiva participación de los salvadoreños en las elecciones habría probado la vigencia de un comportamiento coherente a la luz de un orden social, en crisis, sí, pero

en fase de recuperación. El comportamiento cívico del pueblo salvadoreño quedaría entonces explicado como la expresión de sus valores democráticos, como el rechazo a una alternativa política radical, como la vigencia de un orden normativo interiorizado.

Interroguémonos ahora sobre esta votación, desde otra perspectiva. Preguntémosnos, ante todo, cuántos y quiénes votaron. Un análisis cuidadoso muestra que, dado el limitado número de mesas de votación y el tiempo disponible para votar, resultaba físicamente imposible que hubiera votado el número ofrecido por los datos oficiales. Si a esto se suman otras muchas fallas organizativas, errores técnicos, interrupciones y bloqueos a la votación por causa de la violencia, se llega a la conclusión de que el resultado final fue abultado en por lo menos 450,000 votos, es decir, en un 30 por ciento (CUDI, 1982). Una vez probado que hubo semejante "inflación", lo que en privado o indirectamente en público han reconocido representantes de los propios partidos políticos participantes, la significación total del proceso queda intrínsecamente cuestionada.

Con todo, el que se hiciera fraude no aclara la cuestión. Pues aunque no hubiera votado más que un millón de salvadoreños, o incluso medio millón, se trataría todavía de un número muy elevado dadas las condiciones del país (Las elecciones, 1982). ¿Quién votó en El Salvador? Ciertamente, miembros de todas las clases sociales, ya que no hay medio millón de adultos burgueses en el país. Esto significa que la mayoría de los que votaron pertenecía a los sectores dominados, lo que contrasta con la conocida verificación de que son predominantemente los miembros de las clases altas los que participan en los procesos electorales (ver Verba, Nie y Kim, 1971; Verba y Nie, 1972; Alford y Friedland, 1975). Sin negar la posibilidad de esta peculiaridad en los procesos salvadoreños, cabe también pensar que en

la votación pudo haber un juego entre apariencia y realidad. Pero aun aceptando la diferencia, ello no indicaría que allí operaron factores distintos de los que actúan en otras situaciones sociales. El acto de votar de los salvadoreños no sólo correspondería a motivaciones múltiples, sino que tendría sentidos dispares que no permitirían interpretar el espectáculo aparente como el mismo fenómeno político electoral que se da en otros países con un orden social definido.

¿Por qué votó la gente que votó, muchos o pocos? Ante todo, hay que recordar que en El Salvador se ha votado periódicamente desde hace más de cincuenta años, y que militares y políticos han reconocido que todas las elecciones, sin excepción, han sido fraudulentas, siendo los fraudes más burdos y penosos los de 1972 y 1977. Se sabe que la percepción de ineficacia e impotencia conduce a la alienación respecto a los sistemas políticos (ver Schwartz, 1973). Así, frente a esa tradición salvadoreña, ¿qué sentido pueden tener los procesos electorales para la mayoría de las personas más allá de un ritual periódico, donde se reconfirma una decisión ya establecida en el poder —es decir, una fiesta de los ricos donde se reparten tamales y tragos para los pobres?

Un mes antes de las elecciones, realicé un sondeo de opinión con 1,842 estudiantes preuniversitarios (Elecciones: Sondeo, 1982). Aunque sólo una quinta parte de los encuestados creía que las elecciones podrían ayudar a resolver el conflicto y que, a la hora de señalar el partido de sus preferencias, el 76 por ciento afirmaba que ninguno le satisfacía, sólo uno de cada cinco estudiantes indicaba que no iría a votar. De aquellos que manifestaban su disposición a votar, el 40 por ciento señalaba que lo haría por temor a represalias. Obviamente, los estudiantes preuniversitarios no son representativos de la población salvadoreña; pero si ya ellos mostraban una fuerte discre-

pancia entre su valoración del proceso electoral y su disposición a votar, y si casi la mitad de ellos afirmaba que votaría por temor, puede suponerse lo que sentirían los sectores trabajadores, o el campesinado, sometidos al control laboral de sus patronos y/o al control represivo de las fuerzas policiales. No se olvide que por lo menos 40,000 salvadoreños han sido eliminados, durante los tres últimos años, por la represión militar o paramilitar.

Mas, sería erróneo atribuir la votación del 28 de marzo simplemente al temor; eso sería asumir una causalidad lineal en un orden dictatorial. De hecho, muchas personas en El Salvador estaban cansadas de la guerra y deseaban que se intentara otra vía para resolver el conflicto. "Tu voto, la solución", predicó la propaganda oficial; y no pocos votaron por esa "solución". En la encuesta antes aludida, un 20 por ciento de los que dijeron que votarían afirmó que buscaba, con ello, la paz. Y aunque la gama ideológica de los partidos contendientes apenas se extendía desde la derecha moderada hasta la derecha extrema y cuasi-fascista, la dinámica misma de la campaña electoral creaba la ilusión de alternativas. Así se entiende que una formación política de extrema derecha, ARENA, basada en el gran capital, liderada por un ex mayor del ejército, y con un estilo a medio camino entre la prepotencia oligárquica y el machismo barriobajero, pudiera capitalizar entre quienes sólo podían canalizar su descontento votando contra el gobierno (Martín-Baró, 1982). Sucedió entonces que votar por ARENA representaba al mismo tiempo una opción contra el gobierno conservador, pero a favor de la oligarquía más reaccionaria; un voto contra quienes reprimían, pero en favor de quienes prometían todavía una mayor represión.

Los resultados de la elección del 28 de marzo de 1982 muestra el carácter del proceso: la Democracia Cristiana, que obtuvo una mayoría relativa de votos, tuvo que plegarse a los partidos restantes, que coaliga-



dos lograban una mayoría absoluta. Pero tampoco ellos pudieron imponer su voluntad: la Embajada norteamericana, tras fuertes presiones y prolongadas negociaciones, impuso un presidente de su gusto y determinó la formación de un gobierno de "unidad nacional" (Camps, 1982). Con fraude o sin fraude, con participación popular o sin ella, la elección salvadoreña no tenía como función primordial la delegación de un poder, inexistente o enajenado (ver Montes, 1982), ni constituía la actividad de un orden político unitario.

¿Qué pudo suponer entonces el comportamiento electoral de la población salvadoreña el 28 de marzo de 1982? Ciertamente, no se trató de una simple votación democrática, aunque hubo partidos contendientes, discursos encendidos y votantes movidos por el civismo y la buena voluntad; no puede tampoco decirse que fuera una simple pantomima para consumo internacional, aunque bastante tuvo de ello, lo que repercutió en una pérdida de apoyo a los insurgentes; y no se puede afirmar que fuera sólo el comportamiento típico de una población alienada y aterrorizada, aunque hubo mucho de inconciencia y de temor en gran parte de los votantes. En última instancia, la votación del 28 de marzo constituyó un gigantesco proceso de desmovilización popular, que llevó al comportamiento político de la población salvadoreña que tomó parte en las elecciones, al vacío de poder y de sentido. En esto acertó el gobierno de Ronald Reagan, promotor inicial, impulsor y principal propagandista de estas elecciones.

Que el mismo comportamiento de participación política pueda constituir una verdadera desmovilización social, sólo se entiende en el marco de un desorden establecido, donde las instituciones políticas constituyen armazones carentes de poder real, donde falta aquel espacio público en el que es posible la acción colectiva al abrigo de un "sentido común" normativo, y donde la misma confrontación de fuerzas sociales pierda toda su significación frente al designio último y todopoderoso de un poder extraño (la Embajada norteamericana). Así, la pregunta psicosocial por lo ideológico de la acción de votar lleva, en este caso, a descubrir una participación limitada y compleja tras la apariencia de votación masiva, un proceso de desmovilización social tras la participación electoral, y una verdadera enajenación colonial tras el aparente andamiaje de orden nacional.

Bibliografía

- Alford, R. R. and Friedland, R.: Political participation and public policy. *Annual Review of Sociology*, 1975, 1, 429-479.
- Braunstein, N.A.: Análisis del encargo social en cada rama de la psicología; la psicología social. En Néstor A. Braunstein, Marcelo Pasternac, Gloria Benedito y Frida Saal, *Psicología: ideología y ciencia*. México: Siglo XXI, 1979.
- Campos, T.R.: El "Pacto de Apaneca", un proyecto político para la transición. *Estudios Centroamericanos*, 1982, 407-408, 865-878.
- CUDI (Centro Universitario de Documentación e Información), Las elecciones de 1982. Realidades detrás de las apariencias. *Estudios Centroamericanos*, 1982, 403-404, 573-596.
- Chomsky, N. and E. S. Herman.: *The political economy of human rights*. Vol. 1: *The Washington connection and Third World fascism*. Boston: South End Press, 1979.
- Davies, J.C.: Where from and where to? En Jeanne N. Knutson (Comp.), *Handbook of political psychology*. San Francisco: Jossey-Bass, 1973.
- Elecciones: Sondeo de opinión. *Proceso, El Salvador*. Centro Universitario de Documentación e Información (UCA, San Salvador), N. 53, 15-21 de febrero de 1982. Págs. 7-9.
- Las elecciones y la unidad nacional: Diez tesis críticas. *Estudios Centroamericanos*, 1982, 402, 233-258.
- Fanon, F.: *¡Escucha, blanco!* (Traducción de Angel Abad). Barcelona: Nova Terra, 1970. (Originalmente publicado en 1952).
- Fanon, F.: *Los condenados de la tierra*. (traducción de Julieta Campos). México: Fondo de Cultura Económica, 1963.
- Fanon, F.: *Sociología de una revolución*. (Traducción de Víctor Flores Olea). México: Era, 1968.
- Heider, F.: *The psychology of interpersonal relations*. New York: John Wiley & Sons, 1958.
- Lubek, I.: A brief social psychological analysis of research on aggression in social psychology. En Allan R. Buss (Comp.), *Psychology in social context*. New York: Irvington, 1979.
- Martín-Baró, I.: El llamado de la extrema derecha. *Estudios Centroamericanos*, 1982, 403-404, 453-466.
- Martín-Baró, I.: *Acción e ideología. Psicología social desde Centroamérica*. San Salvador: UCA/Editores, 1983.
- Montes, S.: Las elecciones y el poder en El Salvador. *Estudios Centroamericanos*, 1982, 399-400, 59-66.
- Parsons, T.: *Social structure and personality*. New York: Free Press, 1964.
- Reeves, R. A.; D. C. Richardson, and C. Hendrick: Bibliography of Journal articles in personality and social psychology: 1978. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 1979, 5, 524-542.
- Reich, W.: *Análisis del carácter*. (Traducción de Luis Fabricant). Buenos Aires: Paidós, 1965. (Originalmente publicada en 1933).
- Sampson, E. E.: Cognitive psychology as ideology. *American Psychologist*, 1981, 36, 730-743.
- Schwartz, D. C.: *Political alienation and political behavior*. Chicago: Aldine, 1973.
- Smith, S. S.; D. Richardson, and C. Hendrick: Bibliography of Journal articles in personality and social psychology: 1979. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 1980, 6, 606-636.
- Stéphane, A.: *L'univers contestationnaire ou les nouveaux chrétiens. Etude psychanalytique*. Paris: Payot, 1969.
- Verba, S. and N. H. Nie: *Participation in America: Political democracy and social equality*. New York: Harper and Row, 1972.
- Verba, S.; N. H. Nie, and J. Kim, *The modes of democratic participation: A cross-national comparison*. Beverly Hills, Ca.: Sage, 1971.